

Chile y el nuevo ciclo abierto por las elecciones 2025

Kast y las dos almas de la derecha

por Álvaro Ramíz*

La elección de José Antonio Kast -al igual que el ascenso de la extrema derecha en diversas democracias occidentales- no se puede comprender como un fenómeno meramente identitario, cultural o reactiva frente al progresismo. Su emergencia está profundamente anclada en una crisis estructural de las expectativas económicas y políticas, específicamente en la imposibilidad de recuperar las condiciones de crecimiento y estabilidad que caracterizaron el ciclo histórico que Joseph Stiglitz denominó los "felices 90".

Ese período, que se extendió aproximadamente entre el fin de la Guerra Fría y la crisis financiera global de 2008, estuvo marcado por una convergencia excepcional de factores. A nivel global, el crecimiento económico se sostuvo en el auge de las nuevas tecnologías de la información, la expansión del comercio internacional empujado por China, la pacificación geopolítica posterior al colapso del bloque soviético y una fuerte disciplina fiscal en numerosos Estados. Sin embargo, ese dinamismo tuvo un reverso menos visible: una financiarización creciente de la economía, alimentada por políticas monetarias complacientes y por un marco institucional debilitado deliberadamente por la desregulación. Ello dio lugar a conflictos de interés, fraude sistémico, colusión, asunción de riesgos excesivos y una acumulación de vulnerabilidades que permanecieron latentes durante años.

Consenso binomial

Chile fue uno de los países donde ese ciclo se manifestó con mayor nitidez. Tras el fin de la dictadura, la transición política permitió consolidar un modelo de estabilidad sustentado en el consenso binomial, la previsibilidad institucional y la contención del conflicto social. Se configuró así un reformismo pasivo, en el sentido gramsciano, caracterizado por transformaciones impulsadas desde arriba que fueron institucionalizando el nuevo orden de manera gradual e inocua, sin politizar la convivencia social.

El crecimiento económico se sostuvo en la expansión de las exportaciones, la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral -que duplicó los ingresos familiares en amplios sectores-, el aumento sostenido de la demanda global, en particular desde China, y una profunda desregulación que abrió al mercado ámbitos previamente excluidos de él. Este conjunto de factores alimentó una percepción de progreso continuo y de movilidad social ascendente, que terminó por estructurar el imaginario de éxito del país.

El primer quiebre relevante de ese ciclo se manifestó con la crisis asiática de 1998, que mostró la fragilidad de un modelo altamente dependiente de los flujos externos. No obstante, esa crisis fue parcialmente superada gracias al nuevo boom de los commodities durante la primera década del siglo XXI. El verdadero punto de inflexión llegó con la crisis financiera global de 2008. Desde entonces, el régimen de crecimiento desregulado y la estabilidad política heredada de la transición entraron en una crisis prolongada, sin que haya sido posible restaurar las condiciones excepcionales de los años noventa. Además, se generó una crisis de legitimidad por los escándalos de abusos de las élites, colusión empresarial, impunidad y privilegios arbitrarios.

Avances sociales

A partir de ese momento, Chile -como muchas otras democracias- comenzó a transitar por ciclos electorales pendulares, marcados por la frustración social y la búsqueda persistente de un retorno a los "felices 90". Las respuestas políticas a esta crisis han oscilado entre dos polos: por un lado, la modernización neoliberal representada por los gobiernos de Sebastián Piñera, orientada a restaurar la confianza del mercado sin alterar los fundamentos del modelo; por otro, el reformismo voluntarista del progresismo, que intentó responder a las demandas sociales acumuladas mediante la construcción de una serie de políticas de protección social que atemperaron la dureza de la crisis.

Estas políticas públicas no se deben desmerecer. Desde los gobiernos progresistas de Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Gabriel Boric, Chile ha experimentado avances sociales significativos: se establecieron derechos garantizados en salud con el Plan AUGE/GES y el copago cero, se creó un sistema de protección social contra la pobreza (Chile Solidario) y una política integral de primera infancia (Chile Crece Contigo), se fortaleció la seguridad social con el Pilar Solidario de pensiones, se ampliaron derechos laborales mediante la reducción de la jornada a 40 horas y el alza sostenida del salario mínimo, se impulsó la educación como derecho con la gratuidad en educación superior y el fin al lucro escolar, se avanzó en igualdad de género con la despenalización

del aborto en tres causales y la creación del Ministerio de la Mujer, y se dio un paso estructural al reconocer el cuidado como responsabilidad del Estado a través del Sistema Nacional de Cuidados. A la vez se generaron regulaciones ambientales que aminoran los efectos más brutales del extractivismo.

Los gobiernos progresistas en Chile han logrado construir un Estado social incompleto pero real, ampliando de manera sostenida los derechos sociales y el rol garante del Estado, pero sin desmontar el modelo neoliberal heredado, e instalando al mismo tiempo un nuevo sentido común en la sociedad chilena, donde el bienestar, la protección frente a los riesgos de la vida y la dignidad ya no se conciben como responsabilidades individuales sometidas al mercado, sino como obligaciones colectivas que el Estado debe asegurar. Y logró todo esto bajo una Política Fiscal responsable, sin generar inflación ni endeudamiento y con márgenes razonables de mejora en la eficacia gubernamental.

Aun así, la crisis de seguridad que actualmente vive el país es el síntoma de que este modelo todavía no logra responder a las expectativas y posee carencias endémicas, que se han agravado. La masificación de la delincuencia y el narcotráfico, en un contexto de crisis migratoria, muestran los límites de una red de protección social que no logra resolver el sobreendeudamiento familiar, la difícil flotabilidad de los pequeños emprendimientos, la precaria condición de quienes no ven un horizonte de progreso en las décadas venideras.

Ciclos de movilización

Ante ese límite, la izquierda trató de llevar adelante reformas estructurales, a nivel constitucional, sin contar con las condiciones económicas ni políticas necesarias para validarlas mayoritariamente. Este fracaso ha tenido este ciclo político de una frustración que no debería llevar a desvalorizar lo alcanzado. Pero está claro que estos avances todavía no logran satisfacer las demandas acumuladas. Entre otras limitaciones, por su carácter focalizado, lo que excluye a diversos sectores de estos programas, y por la imposibilidad de retomar un ciclo de crecimiento y desarrollo económico similar al de los 90. En particular, las nuevas generaciones suelen percibir las políticas de protección social más como una forma de dependencia que como un logro colectivo o un derecho conquistado, privilegiando la narrativa del esfuerzo individual por sobre la lógica de la solidaridad social.

La respuesta de los gobiernos de Piñera se orientó a extraer un mayor rendimiento del mismo modelo económico, mediante la modernización de estructuras estatales anacrónicas, desregularizando ciertos sectores, pero trasladando al mismo tiempo nuevas exigencias y mayores costos hacia la población. Tanto en 2011 como en 2019, es-

tos intentos se enfrentaron a ciclos de movilización social intensa que bloquearon dicho programa y lo forzaron a reconducirse hacia respuestas compensatorias, basadas principalmente en bonos y créditos blandos, sin lograr resolver el núcleo del dilema entre crecimiento económico y estabilidad social.

Es en este escenario de expectativas cumplidas donde se inscribe el auge de José Antonio Kast. Su propuesta no ofrece una salida real a las limitaciones estructurales del ciclo actual, pero si articula un relato de orden, disciplina y retorno a una estabilidad perdida, apelando a la memoria idealizada de un pasado que ya no es replicable. Así, la extrema derecha se presenta como una respuesta simplificadora a una crisis compleja; promete restaurar lo que fue posible solo bajo condiciones históricas excepcionales, hoy irrepetibles.

Kast asume que el fracaso de la modernización impulsada por Piñera no se debió a un mal diagnóstico, sino a una falta de coraje político para llevar ese programa hasta sus últimas consecuencias. El ciclo global de auge de la derecha radical alimenta esta hipótesis y refuerza su liderazgo, que se presenta como una propuesta de ruptura y reconfiguración del orden vigente. En ese marco, más que una anomalía, el ascenso de Kast constituye un síntoma: expresa tanto el agotamiento de un modelo incapaz de cumplir las promesas que lo legitimaron, como la dificultad del sistema político para articular un nuevo pacto de crecimiento, bienestar y cohesión social acorde a las condiciones del siglo XXI. Es previsible que pronto estallen divergencias entre estas dos almas de la derecha. La que está dispuesta a "avanzar sin transar" y la que prefiere caminar más lento, pero consolidar.

Si se impone el ala radical de la derecha, es posible que emergan momentos de desborde social que la izquierda difícilmente podrá controlar o conducir, como ya ocurrió durante el período píferista. Al mismo tiempo, el centro político doctrinal, históricamente encarnado por la Democracia Cristiana y portador de una ideología sustentativa, se ha debilitado de manera significativa, dando paso a nuevas expresiones que conciben el centro no como un proyecto normativo, sino como una práctica política instrumental y adaptativa. Este desplazamiento complejiza tanto a la derecha como a la izquierda la posibilidad de articular acuerdos estables con fuerzas como el PDG de Franco Parisi. En este escenario, el rumbo que adopte la política chilena dependerá de cómo se resuelvan las contracciones espasmódicas -sociales y políticas- que inevitablemente generará el gobierno de Kast. ■

*Rector Universidad Academia de Humanismo Cristiano